CÍRCULO DE REFLEXIÓN POLÍTICA
SIGLO XXI

BOLETÍN INFORMATIVO

Publicación del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI

San Salvador, El Salvador, Centroamérica. | N.° 59 Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

info@crpsigloxxi.org | https://crpsigloxxi.org/boletines

PENSAR · ANALIZAR · PROPONER

Haití y el liderazgo de Bukele: el despertar del Escudo de las Américas

La crisis de los cuatro aerotécnicos salvadoreños sitúa en primer plano la protección de los compatriotas, el liderazgo de Bukele y la proyección de El Salvador en la seguridad hemisférica.

PÁGINAS 1–2

Haití: el liderazgo de Bukele y la proyección internacional de El Salvador

Proteger cuatro vidas y convertir una respuesta eficaz en confianza diplomática y cooperación.

PÁGINAS 3–7

Haití: En un Estado inexistente, el presidente Bukele llevará al Estado

La recuperación de la autoridad estatal como condición para la ley, el orden y la libertad.

PÁGINAS 7–9

Haití, fracaso e inoperancia multilateral

Los límites de la ayuda internacional y la necesidad de acciones capaces de proteger vidas.

PÁGINAS 9–10

Militares desaparecidos en Haití El Salvador no abandona a los suyos

La respuesta estatal busca que los cuatro aerotécnicos salvadoreños regresen sanos y salvos.

PÁGINAS 10–12

El Salvador saldando deudas históricas

La educación pública como inversión para saldar deudas con la ciudadanía y la democracia.

PÁGINAS 12–15

El desarrollo implica sacrificio

Esfuerzo, ajustes y responsabilidad generacional para construir mejores condiciones de vida.

PÁGINAS 15–17

ADEMÁS EN ESTA EDICIÓN

¿Qué llevó a la élite hondureña a vincularse al narcotráfico?
PÁGINAS 17–24

Honduras gobernada con panfletos
PÁGINAS 24–26

Una voz que no puede hablar: nuestras mascotas
PÁGINAS 26–28

> “La prioridad inmediata tiene cuatro nombres y cuatro vidas.

Haití: liderazgo y proyección internacional

Miembros del Círculo de Reflexión Política de El Salvador Siglo XXI

Juan Contreras • Oscar Martínez Peñate • Nelson Flores • Mélida Villatoro • Aldo Álvarez
René Martínez Pineda • Mauricio Rodríguez • Rafael Góchez • José Valdez • Christian Colón

BOLETÍN INFORMATIVO

Círculo de Reflexión Política Siglo XXI

San Salvador, El Salvador • N°59 • Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

info@crpsigloxxi.org | https://crpsigloxxi.org/boletines

Análisis, reflexión y debate político orientado al fortalecimiento democrático y el desarrollo nacional.

Haití y el liderazgo de Bukele: el despertar del Escudo de las Américas

La emboscada contra cuatro aerotécnicos salvadoreños en Croix-des-Bouquets ha dejado de ser una contingencia militar para convertirse en el escenario estelar donde Nayib Bukele redefine la geopolítica hemisférica. Ante el vacío crónico dejado por dos décadas de inoperancia de la ONU, la OEA y el fracaso de contingentes extranjeros sin doctrina, el mandatario salvadoreño ha quebrado la inercia regional con un golpe de autoridad: ultimátum directo, despliegue de fuerzas élite y una resolución innegociable de proteger a los suyos.

Bukele capitaliza hoy un capital político sin precedentes. Su sintonía estratégica con Washington y el respaldo pragmático de Donald Trump consolidan a San Salvador como el único interlocutor del continente con legitimidad y métodos probados contra el crimen organizado transnacional. Mientras liderazgos vecinos optan por la contención pasiva y discursos de foro, Bukele proyecta poder real y activa de facto lo que podria ser la primera gran misión del Escudo de las Américas, demostrando que la seguridad del Caribe no se resuelve con comunicados, sino con liderazgo vertical y superioridad táctica.

Para el Consejo de Transición de Haití, esta coyuntura representa una oportunidad histórica e irrepetible. Aferrarse a misiones multilaterales agotadas solo garantiza prolongar la anarquía. La alternativa es alinearse con el Modelo Bukele: articular una ofensiva conjunta, desmantelar las pandillas y aplicar a sus cabecillas el régimen de aislamiento absoluto que demostró éxito con el modelo penitenciario salvadoreño.

Desde la perspectiva estratégica y económica, los vacíos de poder no se toleran; se ocupan. Nayib Bukele no solo llena ese vacío, sino que asume el mando moral y operativo de la región. El Salvador ya no pide permiso en el tablero internacional: lidera, ejecuta y marca la pauta de la estabilidad hemisférica.

Haití: el liderazgo de Bukele y la proyección internacional de El Salvador

Para las familias de los cuatro salvadoreños retenidos en Haití, lo verdaderamente importante es que regresen vivos. Esa prioridad debe orientar cualquier valoración de los acontecimientos. Alrededor de ella, sin embargo, se desarrolla una situación cuyas implicaciones alcanzan la credibilidad del Estado salvadoreño, el liderazgo del presidente Nayib Bukele y el lugar que nuestro país podría ocupar en la escena internacional.

El 21 de octubre, Bukele anunció una operación para recuperar a los cuatro técnicos de aviación salvadoreños que, según explicó, participaban en labores de evacuación médica dentro de una misión internacional. Habían desaparecido después del ataque del 18 de octubre contra el vehículo en el que se desplazaban. Su recuperación constituye una prueba concreta de respuesta estatal ante una crisis fuera de nuestras fronteras.

Observar estos acontecimientos únicamente mediante el intercambio de amenazas o los videos que circulan en redes sociales deja fuera buena parte de su significado. Una crisis de esta naturaleza exige decisiones políticas, coordinación diplomática, recursos y capacidad institucional. También obliga a asumir responsabilidades por los resultados.

Ahí adquiere relevancia el liderazgo de Bukele. Al ordenar la operación y establecer públicamente como objetivo el regreso de los compatriotas, el presidente vincula su autoridad a un compromiso verificable. La firmeza de esa decisión deberá expresarse en la capacidad de conducir los esfuerzos necesarios para proteger sus vidas, colaborar con los aliados y responder ante un entorno complejo.

Imaginemos lo que representaría su regreso seguro. Para la población salvadoreña, reforzaría la confianza en un Estado dispuesto a actuar cuando sus ciudadanos están en peligro en el extranjero. Para los países que participan en la misión, podría aportar evidencia de que El Salvador es un socio capaz de asumir responsabilidades y contribuir bajo presión. Para Bukele, añadiría una dimensión internacional a su liderazgo en materia de seguridad.

Esa dimensión ya tiene un espacio diplomático concreto. En la sesión del Consejo de Seguridad dedicada a Haití, representantes de distintos países expresaron solidaridad con El Salvador. Estados Unidos manifestó su apoyo a la recuperación de los salvadoreños, mientras nuestra representación destacó la coordinación con los contingentes internacionales. La crisis está siendo observada dentro del principal órgano de Naciones Unidas encargado de la paz y la seguridad internacionales.

Esto permite recuperar un antecedente que merece atención. En junio de 2019, al comenzar la presidencia de Bukele, El Salvador presentó su candidatura a un asiento no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2020–2021. No resultó elegido; el puesto correspondió a San Vicente y las Granadinas. Aquella postulación dejó constancia de una aspiración temprana de participar en espacios de decisión internacional.

Existe, además, una conexión sustantiva entre esa aspiración y la contribución a la seguridad colectiva. El artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas establece que, al elegir a los miembros no permanentes, debe prestarse especial atención a sus aportes a la paz y la seguridad internacionales, junto con una distribución geográfica equitativa. Una participación responsable y eficaz puede, por tanto, fortalecer las credenciales de un país para aspirar a ese espacio.

Si El Salvador decidiera promover una nueva candidatura, una actuación reconocida en Haití podría formar parte de sus argumentos. Conseguir el asiento exigiría construir respaldos: la elección requiere una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes de la Asamblea General. El desempeño sobre el terreno tendría que acompañarse de relaciones sostenidas con América Latina, el Caribe y las demás regiones.

La oportunidad geopolítica consiste precisamente en convertir capacidad demostrada en confianza diplomática. Para un país pequeño, ser considerado útil y confiable en un asunto de importancia internacional puede ampliar su acceso a conversaciones, alianzas y decisiones que afectan sus intereses. El Salvador podría ganar un peso mayor en la agenda de seguridad regional y proyectar esa experiencia hacia los debates multilaterales.

Ese reconocimiento también podría contribuir al desarrollo nacional, mediante una relación indirecta que conviene comprender. Una cooperación más estrecha puede facilitar formación especializada, intercambio

tecnológico y fortalecimiento institucional. Una diplomacia con mejores relaciones puede abrir conversaciones sobre comercio, educación e inversión. Para que esas posibilidades produzcan beneficios, harían falta acuerdos concretos, seguimiento y capacidad de ejecución dentro del país.

Pensemos en una cadena sencilla: trabajar eficazmente con otros Estados puede generar confianza; esa confianza puede ampliar la cooperación; y una cooperación bien orientada puede fortalecer capacidades nacionales. El valor económico aparece cuando esas capacidades se traducen en mejores servicios, conocimientos y oportunidades para los salvadoreños. La visibilidad internacional ofrece una puerta que después hay que saber aprovechar.

Por eso, el éxito debe evaluarse con profundidad. Recuperar a los cuatro compatriotas sería un resultado humano y operativo de enorme importancia. Consolidar una reputación internacional exigiría, además, proteger a la población civil, respetar la soberanía haitiana y actuar coordinadamente con sus autoridades y la fuerza multinacional. La forma de alcanzar el objetivo también determinará cómo será percibido.

Haití tiene su propia historia, sus instituciones y sus complejidades. Un rescate exitoso tendría un alcance específico; la estabilización del país requiere un esfuerzo mucho más amplio y sostenido. Reconocer esa diferencia permite valorar con seriedad lo que El Salvador podría aportar y evita atribuir a una sola operación resultados que todavía deben construirse.

El liderazgo de Nayib Bukele enfrenta aquí la posibilidad de demostrar que la determinación política puede sostenerse mediante capacidad institucional y cooperación internacional. Si los compatriotas regresan seguros y la actuación salvadoreña obtiene reconocimiento por su eficacia y responsabilidad, el país dispondría de un nuevo argumento para hacerse escuchar.

La prioridad inmediata tiene cuatro nombres y cuatro vidas. El horizonte posterior sería convertir una respuesta eficaz en confianza duradera y esa confianza en oportunidades para El Salvador. Allí podría encontrarse la trascendencia de este episodio: en la capacidad de un país pequeño para asumir responsabilidades que amplíen su influencia y contribuyan al bienestar de su gente.

Haití: En un Estado inexistente, el presidente Bukele llevará al Estado

Como lo hemos sostenido en múltiples ocasiones, no existe sociedad posible donde el poder efectivo no sea ejercido por el Estado. La paz, la seguridad, la libertad y el desarrollo económico no son fenómenos espontáneos. Son la consecuencia directa de la existencia de instituciones capaces de imponer el imperio de la Ley sobre quienes pretenden sustituirla mediante la violencia. Allí donde la Ley desaparece, inevitablemente emerge la fuerza bruta. Allí donde el Estado retrocede, avanzan las organizaciones criminales.

Precisamente esa parece ser la tragedia que vive hoy Haití.

La reciente emboscada y secuestro de militares salvadoreños desplegados en territorio haitiano como parte de una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas constituye mucho más que un simple incidente de seguridad. Representa la manifestación más evidente de un fenómeno político e institucional mucho más profundo: la prácticamente inexistencia del Estado haitiano en amplias zonas de su territorio. Los efectivos salvadoreños formaban parte de una fuerza multinacional destinada a combatir a las organizaciones criminales que mantienen bajo su control extensas áreas del país y que desafían abiertamente a las autoridades legítimas.

Lo que ha ocurrido en Haití recuerda inevitablemente al El Salvador que conocimos durante décadas. Un país donde las pandillas llegaron a ejercer control territorial, imponer reglas propias, cobrar extorsiones, determinar quién podía entrar o salir de determinadas comunidades y desafiar permanentemente la autoridad estatal. En términos prácticos, aquello constituía una grave degradación del Estado de Derecho y un peligroso avance hacia condiciones propias de un Estado fallido.

La diferencia es que El Salvador decidió revertir esa situación. La recuperación del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado permitió restaurar la Ley, recuperar territorios, devolver la seguridad a millones de ciudadanos y restablecer condiciones mínimas para la convivencia social y el desarrollo económico.

Por esa razón, el ultimátum lanzado por el Presidente Nayib Bukele a los captores de los militares salvadoreños posee una dimensión que trasciende el rescate mismo. Bukele ha exigido la liberación inmediata y sin daños de los rehenes y ha advertido que, de no ocurrir así, las operaciones militares se intensificarán significativamente. Incluso recordó a los grupos criminales haitianos que *"Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también"*.

La cuestión de fondo es evidente. Cuando un Estado deja vacíos de poder, alguien los ocupa. En Haití han sido las pandillas. En El Salvador, antes de la transformación de los últimos años, también lo fueron. La diferencia radica en que El Salvador decidió reconstruir la autoridad estatal, Haití aún lucha por recuperarla.

Por ello, la posible intervención salvadoreña para rescatar a sus compatriotas contiene un profundo simbolismo político: en aquellos lugares donde el Estado prácticamente ha desaparecido, alguien deberá restablecer la Ley. Porque una verdad sigue siendo universal e inmutable: donde no impera la Ley, no puede existir orden, y donde no existe orden, la libertad, la democracia y la prosperidad terminan siendo imposibles. En un Estado inexistente, el presidente Bukele parece haber decidido llevar precisamente aquello que Haití más necesita: el Estado.

Haití, fracaso e inoperancia multilateral

Esta semana se conoció que cuatro militares salvadoreños, integrantes de la misión internacional desplegada en Haití por la ONU, fueron secuestrados por estructuras criminales que ejercen el control territorial en dicho país. Este grave incidente pone en evidencia la profunda descomposición institucional de un Estado prácticamente desintegrado y expone los severos límites de la ayuda internacional cuando no existe una decisión firme y estratégica de resolver los problemas esenciales. Para El Salvador, el hecho tiene una implicación directa: sus militares se encuentran expuestos a graves riesgos en un escenario donde los organismos internacionales no han logrado restablecer el orden ni garantizar condiciones mínimas de seguridad.

El triste escenario haitiano constituye un recordatorio de lo que ocurre cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza y queda postrado ante la corrupción y la ineficiencia. La experiencia salvadoreña reciente ofrece, en cambio, un contraste significativo: la recuperación del control territorial frente a las pandillas ha requerido la alineación estratégica de las instituciones y una decisión política frontal, como lo evidencian los resultados obtenidos, respaldados tanto por datos objetivos como por la abrumadora aprobación ciudadana.

El caso de Haití resulta especialmente alarmante por la inoperancia de organismos multilaterales como la OEA y la ONU, así como por el desinterés práctico de las potencias internacionales ante un país abandonado a la ley de la selva. El envío de misiones internacionales de buena voluntad, pero carentes de estrategias eficaces y de una decisión firme de combatir el crimen, contribuye a mantener a la nación caribeña en un colapso persistente.

Resulta imperativo que la comunidad internacional asuma un compromiso firme e integral para desarticular estas estructuras delictivas y rescatar al pueblo haitiano de su postración. El Salvador, que conoce de primera mano el costo de vivir bajo el dominio criminal, tiene razones adicionales para exigir que la cooperación internacional se traduzca en acciones capaces de proteger vidas y restablecer el orden.

Militares desaparecidos en Haití
El Salvador no abandona a los suyos

Durante la semana que recién finaliza, acaparó la atención de la comunidad local e internacional la desaparición de cuatro militares salvadoreños destacados en Haití en una operación amparada a la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, para transformar la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en una nueva denominada Fuerza de Represión de Pandillas, esto debido al crecimiento exponencial de pandillas en este país del Caribe, se debe de hacer notar que los cuatro

militares pertenecen a la Fuerza Aerea Salvadoreña en calidad de aerotécnicos, se sabe fueron a abastecerse de productos alimenticios y es donde fueron emboscados por los terroristas de las pandillas haitianas, desde entonces se perdió comunicación con ellos, ante tal situación el Presidente Nayib Bukele no escatimó recursos para que nuestros hermanos salvadoreños vuelvan a casa sanos y salvos.

El Salvador es ahora reconocido por su valentía y determinación un ejemplo para el mundo cuando de erradicar la delincuencia se trata y es donde se reconoce a un pequeño país, ejecutando grandes operaciones evidentemente existen sectores que se oponen a que nuestro país haga todo para recuperar a nuestros hermanos salvadoreños, lo que si se debe de reconocer es que un país como El Salvador y sobre todo contando con un presidente que ha dado muestras repetidamente que su interés fundamental es el ciudadano salvadoreño, y coherente con su forma de gobierno no ha abandonado a su suerte a nuestros militares por ahora desaparecidos.

Ya el mandatario ha enviado su advertencia a las pandillas haitianas y esto acompañado de una ofensiva militar que presagia un final no halagador para quienes han tenido sometido al pueblo haitiano, país con un decrecimiento económico del -2% del PIB y con una tasa de desempleo del 85%.

El Salvador saldando deudas históricas

El presupuesto histórico asignado a la cartera de educación, para el año 2027, es sin duda el punto de no retorno de la transformación social del país que está liderando el presidente, Nayib Bukele. En El Salvador, como producto de décadas y décadas de corrupción y de abandono del pueblo, prácticamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo social en beneficio del pueblo es una deuda histórica, de modo que el presidente heredó un país con múltiples deudas, todas ellas históricas.

Sin embargo, de cara al futuro como promesa cumplida, la deuda histórica más importante que se está saldando en nuestro país es la de la educación pública, ya que ésta es la que salda muchas otras deudas. En las gestiones anteriores a Nayib Bukele, la educación pública no sólo fue ridiculizada en los presupuestos que le asignaban, sino también fue abandonada en materia de reformas educativas y la infraestructura escolar fue una versión de los penales.

En ese sentido, apostarle a la educación pública con un presupuesto digno realmente significativo en lo cuantitativo y cualitativo (8.1% del PIB y más de 25% del presupuesto general) es saldar también la deuda

histórica con la cultura política, en tanto la escuela es la que forja ciudadanos profesionalmente competentes, con valores sociales nobles y totalmente comprometidos con el bienestar del país.

En el más amplio y simbólico sentido sociológico, saldar la deuda con la educación pública (lo cual únicamente es cuestionado por los opositores más obtusos y sus sofistas de oficio) es saldar la deuda histórica con la democracia, pues ésta no existe -o es artificial- en un país en el que su población tiene muy baja la tasa de escolaridad y una calidad educativa inexistente, debido a que el ejercicio democrático, en todos sus matices, supone que se hace con conocimiento de causa, y eso en buena parte es resultado de altos niveles de escolaridad.

En ese sentido, saldar la deuda histórica con la democracia -que el horizonte de todas las transformaciones sociales que abandera Nayib Bukele, se refiere al proceso continuo mediante el cual, rompiendo los viejos paradigmas de la política, el Estado se constituye en un sujeto social de facto que busca resolver, de raíz, las profundas deficiencias, carencias, desigualdades sociales y promesas incumplidas que se han ido acumulando a lo largo de décadas de gobiernos previos, cuyos funcionarios sólo buscaron resolver el problema del bajo saldo de sus cuentas de ahorro.

En El Salvador, referente idóneo de lo que implica reinventar un país y reinventar el liderazgo político más allá de lo político, saldar la deuda histórica con la democracia demanda, al menos, tres dimensiones sociológicas y políticas:

1. Reconstruir el concepto de “democracia” a imagen y semejanza del pueblo y del tiempo en el que vivimos. Por indolencia cognitiva, la sociología y la política clásicas abordaban el tema de la democracia desde una perspectiva estrictamente burocrática (elecciones periódicas, falsa división de poderes, gobernabilidad como negociaciones oscuras institucionalizadas). No obstante, la sociología crítica plantea que la democracia tiene una arista formal, pero ésta por sí sola no es capaz de sostenerse si el país vive en condiciones de violencia generalizada, falta de oportunidades, impunidad legitimada y corrupción como prestación social de los políticos. En ese sentido, saldar la deuda histórica con la democracia, tal como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele, implica construir una democracia real y sustantiva en la que los derechos políticos se expandan hasta la diáspora y, sobre todo, se traduzca realmente en bienestar material-espiritual y una dignidad que parta de la premisa de que lo público debe ser mejor que lo privado, pues es eso lo que garantiza la calidad de ciudadanos.

2. Invertir de forma significativa (en lo cuantitativo y cualitativo) en la educación (pilar estratégico y fundacional), la seguridad, la salud y los derechos socioculturales. En esa línea, la sociología (ciencia social visibilizada durante las gestiones de Nayib Bukele) plantea que los servicios públicos como los señalados no se reducen al impulso políticas públicas asistencialistas (casi siempre pírricas), sino que son las precondiciones para el ejercicio concreto de la democracia. Así, al invertir sustantivamente en la educación pública no sólo se está saldando la deuda histórica con ella, sino también se salda la deuda histórica con la democracia, en el entendido de que un ciudadano educado, seguro y con las necesidades básicas ampliadas cubiertas plenamente es libre para participar en el destino político del país.

3. Ruptura con las perversas prácticas del pasado y la apertura de nuevos paradigmas de vida. En el país, la insatisfacción, desilusión y desencanto popular con el tipo de democracia que se tenía y sufría, debilitaron la legitimidad e institucionalidad del sistema político salvadoreño. Entonces, saldar las deudas históricas y estructurales (agregando a las antes señaladas la de la eliminación de financiamientos dudosos -deuda política- de los partidos, la provisión sostenida de infraestructura básica de calidad y la recuperación del control territorial) representa la genuina armazón de la confianza ciudadana en la capacidad y pertinencia del Estado para transformar la realidad, acción que sólo es posible si se tiene un liderazgo de la envergadura del de Nayib Bukele.

El desarrollo implica sacrificio

El Salvador está pasando un proceso único y complejo, que conlleva altibajos; esta realidad por ningún motivo debe verse como algo equivocado en las decisiones que se están tomando, al contrario, hay que comprender que toda visión y acción para mejorar una nación; pasa por ciertos sacrificios que el mandatario salvadoreño le denominó al inicio del segundo mandato, como: “medicina amarga.” Es decir, un espacio de sacrificio, para establecer las bases de una mejor forma de vida.

El maestro Bernardo Stamateas alguna vez expresó: “Si miras mi éxito, mira también mi sacrificio.” No se puede pretender lograr grandes cosas, sin el mínimo de esfuerzo o de sacrificio, y cuando se trata de un país, aún con mayor razón. Todos hemos experimentado la tormenta antes de la calma, el dolor antes de la paz, el aos antes del orden y así sucesivamente; pues de la misma manera, cuando se trata de sacar adelante una nación, debe existir el

sacrificio de una generación, para dejar mejores condiciones a las venideras.

Esto dicho con antelación, permite instaurar una veracidad inevitable, es necesario el dolor y sinsabor del tratamiento y el medicamento, para lograr la salud del paciente (haciendo alegoría médica), pues de la misma forma, es de menester, sentir dificultades sociales, económicas, entre otras, cuando se están haciendo los ajustes necesarios para el crecimiento y desarrollo de una nación. No hay otro camino para el desarrollo social, sino, el de sentar las bases que casi nunca se ven una vez levantado el edificio.

De tal suerte, no entremos en desconsuelo cuando hayan aspectos difíciles de afrontar en nuestra sociedad, al contrario, sintámonos parte de la columna estatal que se está erigiendo para un ejemplo de república para la región; seguramente vendrán grandes éxitos, logros y mejoramientos en todas las áreas de la vida social de nuestro gran país, pero es necesario este momento de ajustes y sacrificios en pos de nuestros hijos y nietos, que sin duda, vivirán en un país que los ahora adultos, solo soñamos.

Tengamos la valentía y el gozo de ser la generación de la base, de ofrendar nuestro esfuerzo por los que vienen, y de vivir conforme a lo expresado por el maestro Giorgio Cantarini “Ese es el sacrificio que hizo mi padre. El regalo que tenía para mí.”

¿Qué llevó a la élite hondureña a vincularse al narcotráfico?

La segunda edición del libro “Tierra de Narcos” (editorial Grijalbo), del periodista hondureño Óscar Estrada, incluye un nuevo capítulo con el título de este artículo. Por la importancia de este se resume a continuación lo relevante de dicho capítulo, con ligeros agregados nuestros.

Inicia señalando que, después de la desintegración de la Federación Centroamericana, fue evidente que el país no contaba con condiciones económicas para enfrentar los retos de un Estado moderno, pero la urgencia de impedir el alzamiento de los oprimidos apresuró a las élites criollas a separarse primero de España -¡lo dicen en el Artículo 1 del Acta de Independencia! - y luego de México.

A diferencia de otras colonias en el continente, en Centroamérica no ocurrió acumulaciones de capital considerables, y el capitalismo apenas llegó a estas tierras hasta el último cuarto del s. XIX. El único recurso era la tierra, la fuerza de trabajo nativa y los minerales, si había en una zona dada.

En el caso de Honduras, los esfuerzos de reforma se dieron para crear una economía de enclave (1876-1883), marcándose a partir de entonces la fractura en la élite dominante, la que ha evolucionado hasta nuestros días. Entre 1876 y 1926 el conflicto ocurrió entre los vinculados al capital transnacional (minería y banano) contra los centrados en el monocultivo (café, tabaco, añil, zarzaparrilla y hato ganadero).

La fractura se dio con el ingreso del capital bananero desde finales del siglo XIX, profundizándose durante el siglo XX con el desarrollo de los centros urbanos de la costa norte en la primera mitad de ese siglo. Entonces surge una clase burguesa formada principalmente por migrantes palestinos y algunos nacionales que -a diferencia de la élite- se enfocaron en el comercio para los obreros de las bananeras, aliándose con la fracción moderna surgida de la reforma liberal, con un interés en el comercio y no en la tierra.

La depresión de inicio del siglo XX y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a consolidar a la élite tradicional, surgiendo lo que el autor llama *pax cachureca*, marcada por la mano dura del dictador Tiburcio Carías Andino (1933-1949); permitiendo que el país se aislara del mundo. La fracción de clase hegemónica que antes se vinculó al capital transnacional de la minería y banano entonces fue desplazado cuando Estados Unidos reorientó sus recursos para recuperar su economía y también para la guerra.

La *pax cachureca* terminó al llegar a la presidencia Juan Manuel Gálvez (1949-1954), y los Estados Unidos cambiaron hacia una política más expansiva. Gálvez y Julio Lozano Díaz (1954-1956) fueron empleados de las compañías bananeras. Para entonces se forjó el primer sistema financiero nacional (Banco Central de Honduras y Banco Nacional de Fomento, hoy BANADESA), permitiendo al país entrar -con 50 años de retraso- en la lógica del capitalismo del siglo XX.

La presión de las bananeras y el nuevo rol de Estados Unidos impulsaron la salida de Carías y el ascenso del supuesto sector reformista del Partido Nacional. Lo mismo ocurrió en el Partido Liberal, con las pugnas entre el sector moderno, dirigido por Ramón Villeda, y la visión tradicional de Modesto Rodas.

El autor recalca que entre las facciones tradicionales y modernistas de ambos partidos tradicionales no hay fronteras; e incluso en las fuerzas políticas emergentes, como el Partido Libre, que se autoproclama de izquierda.

Otro actor clave es el ejército, cuyo poder duró dieciocho años, aliándose abiertamente con el sector reformista del Partido Nacional. Por tal razón, uno de sus líderes -Ricardo Zúñiga Agustinus- fue vicepresidente en cada gobierno militar, hasta el retorno a la democracia en 1982. Durante todos esos gobiernos se favorecieron los negocios de la élite moderna y de las compañías transnacionales de Estados Unidos.

Entre 1962 y 1982 también se establecieron los capitales que ayudarían a conformar la modesta industrialización hondureña, gracias a su alianza con los militares. El autor cita a Miguel Facussé Barjum, cuya

fortuna la atribuye construida a partir de la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), que había sido creada para desarrollar la industria nacional.

A inicios de los años 80, la cúpula gobernante fue bicéfala: por un lado el gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) quien era de la facción tradicional -y heredero de Rodas Alvarado-; y por el otro, la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) que era un "Estado paralelo" auspiciado por la embajada estadounidense -y con marcada línea anticomunista- que defendía una visión moderna del desarrollo económico.

Después del triunfo electoral de Rafael Leonardo Callejas en 1989 se evidenció la tendencia de favorecer a la élite moderna sobre la tradicional, apoyada por los vientos del neoliberalismo de Reagan y Bush padre; que ayudó a los exportadores maquileros, al capital financiero y al sector agroexportador.

La facción tradicional de la élite, marginada del desarrollo económico, buscó nuevas formas de acumular riqueza y poder. Es cuando entró el narcotráfico como apoyo al capital económico y político.

En esa época, la mayor parte de los cargamentos viajaban por rutas marítimas y aéreas caribeñas. El tráfico por Honduras en ese momento era un simple contrabando controlado por oficiales del ejército que cobraban coima (soborno) por dejarlo pasar.

Mario y Mary Ferrari -asesinados por militares en 1977- y Ramón Matta Ballesteros fungían como enlace entre los carteles de Medellín y Guadalajara, mientras el país era solo una ruta secundaria de la droga.

Los narcotraficantes colombianos y mexicanos se relacionaron con los militares durante los gobiernos de los generales López, Melgar y Paz, pero el triunfo de la revolución sandinista en 1979 y el ascenso de Reagan cambiaron las reglas del juego pues para 1980, los intereses geoestratégicos de Washington habían cambiado: para ellos era más urgente derrotar a los sandinistas que impedir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. A eso debe agregarse la incapacidad que el Congreso norteamericano impuso a la Casa Blanca para iniciar intervenciones armadas o para apoyar grupos armados en el extranjero sin su autorización, después de la derrota en Vietnam.

Por ello Reagan recurrió a los fondos de la venta de armas a Irán (en lo conocido como el escándalo Irán-Contras) y a recursos del tráfico de droga en México y Centroamérica. Los aviones de Matta Ballesteros volaban desde Honduras cargados con cocaína colombiana, luego descargados en Estados Unidos y vueltos a cargar con armamento comprado con las ganancias de la venta de armas a Irán -en guerra con Irak- para luego volar de regreso a Honduras con armas para la Contra. Se recuerda la comparecencia del coronel Oliver North en 1987 ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes y ante el Comité Selecto del Senado, para rendir informe sobre lo acontecido.

Durante los años 80, quien controlaba el territorio hondureño era la CIA. Su relación con los cárteles sudamericanos y mejicanos se evidenció en 1985 con el asesinato en México del agente de la DEA Enrique Camarena, quien -según testimonios desclasificados por el gobierno de Estados Unidos- descubrió un centro de entrenamiento para Contras en México, auspiciados por el cártel de Guadalajara.

Mientras tanto, los militares hondureños beneficiaron de la guerra de Reagan en Nicaragua: el flujo de dólares sin control enriqueció a los altos mandos, a quienes poco importaba la Guerra Fría y la guerra contra los narcos colombianos y mejicanos.

Durante la dictadura militar (1963-82), las fuerzas armadas se aliaron con el Partido Nacional y la facción moderna de la élite. Esta fractura de la élite no fue tan clara dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente en

lo relativo a la reforma agraria -uno de los proyectos estrella de la facción moderna- que fue desmantelada por el gobierno de Melgar Castro, quien gobernó en alianza con los sectores tradiciones de la élite rural. La masacre de Los Horcones (1975) fue importante para acabar con la reforma agraria, ocurriendo en la finca de Manuel Zelaya Ordóñez, padre y suegro -respectivamente- de los expresidentes Manuel Zelaya (2006-2009) y Xiomara Castro (2022-2026), quienes se reclaman de izquierda.

Después de las reformas neoliberales de Rafael Callejas (1990-1994), el huracán Mitch causó destrozos en 1998, terminando con la posibilidad de la facción tradicional de acumular capital para competir políticamente contra la facción moderna para controlar al Estado, la que no se vio particularmente afectada en su capital, dado que su riqueza descansaba en industrias urbanas (maquila, sector financiero, comercio y telecomunicaciones, etc.), las que más bien fueron favorecidas durante la reestructuración de la economía por Callejas.

A eso hay que agregar que la cooperación internacional tomó las demandas populares que exigían reformas electorales desde la crisis constitucional de 1985, cuando se enfrentaron las dos facciones de la élite liberal (los tradicionales suazocordovista/rodismo versus el modernismo de los azconistas/rosenthalistas) por su turno en las elecciones generales de dicho año. Estados Unidos y la Unión Europea -por medio del PNUD- impulsaron en 2001 las reformas electorales que parecían la solución a la falta de representación democrática.

Por su parte, los narcotraficantes -antes dependientes de los caudillos, a cambio de una fracción de las ganancias- ya no necesitaban acuerdos con los políticos para acceder al poder, pues ellos podían ser el poder por medio de la facción tradicional, lo que lograron en las elecciones de 2001, con la llegada de Pepe Lobo a la presidencia del Congreso.

Los gobernantes de Honduras desde 2006 han estado alejados de los centros de poder de la facción moderna: Manuel Zelaya y Pepe Lobo, ambos de Olancho; Juan Orlando Hernández, de Lempira -con el breve paso de Micheletti, de Yoro- y Xiomara Castro, otra vez de Olancho.

Desde 2006 fueron frecuentes las denuncias en la prensa -controlada por la facción moderna- vinculando al presidente Manuel Zelaya con el narcotráfico. Él se impuso a la facción moderna de su partido Liberal, financiando su campaña en parte con fondos del narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, conocido como “Don H”, quien en las cortes de Nueva York señaló que le financió con dos millones de dólares.

En esas elecciones compitió contra Porfirio Lobo, vinculado con los Rivera Maradiaga, herederos del cártel de Aníbal Echeverría Ramos. Según el autor, ello habría sido anecdótico si la fracción moderna de la élite no hubiera cometido el error de propiciar un golpe de Estado contra Zelaya en 2009, y acá procede hacer un pequeño paréntesis.

El narcotráfico requiere de acuerdos con quien controla territorio, ya sean militares o contras (en los 80) o civiles (desde los 90). El Plan Colombia los empujó a buscar nuevas rutas por México y Centroamérica; mientras que la Iniciativa Mérida movió a los cárteles mejicanos hacia Centroamérica.

En las democracias modernas, quien tiene el capital para campaña controla a las estructuras del Estado. La élite hondureña moderna -por su relación con el capital transnacional y Estados Unidos- acumuló poder, favoreciendo sus intereses desde las estructuras del Estado. La crisis financiera de 2008 impidió que la facción moderna accediera a capital de bancos internacionales, mientras que el capital del chavismo -por los altos precios del petróleo en esa época- favoreció a la facción tradicional de la élite.

La alteración del equilibrio de las facciones creó condiciones para la alianza entre la facción tradicional y el narcotráfico, alianza que aún persiste.

Al analizar a los sectores que apoyaron al golpe de Estado de 2009, se reconoce a los principales representantes de la facción moderna de la élite de ambos partidos tradicionales (Liberal y Nacional), así como de la empresa privada y grupos de la sociedad civil.

A la vez, la élite tradicional, antes adversa a los sectores populares, se alió con aquellas categorías sociales más afectadas por las políticas neoliberales. El narcotráfico, nuevamente, favoreció la alianza con quien en la práctica ejerciera el control del territorio.

Juan Orlando Hernández, representante de la facción tradicional

-al igual que los dos presidentes anteriores-, accedió a la presidencia en 2014 con ayuda financiera del narcotráfico, como ya se indicó. Con él se constata cómo la facción tradicional de la élite se posicionó en el control de los recursos del Estado, estableciendo cambios en la legislación para garantizar la hegemonía necesaria para enfrentar política y económicamente a la facción moderna, políticamente debilitada después del golpe de Estado de 2009.

Esto no quiere decir, que ni la facción tradicional ni la moderna tomen medidas a favor de las clases desposeídas. Ambas pelean el acceso a los recursos del Estado en favor de sus respectivas facciones de clase, y el narcotráfico -en tal sentido- es un recurso disponible en ese enfrentamiento.

Llegar a este punto de fricción entre las élites hondureñas ha tomado 140 años, y no terminará pronto. Pero sólo entendiendo las razones económicas de fondo pueden los hondureños determinar cuáles acciones tomar como país para dejar de ser tierra de narcos.

Honduras gobernada con panfletos

Honduras navega sin rumbo. La corrupción sigue bajo “sospecha”, pese a las numerosas evidencias que se han presentado; los políticos corruptos cuentan con el privilegio de defenderse en libertad, mientras que, cuando se acusa a un ciudadano común, montan un operativo con todo el equipo bélico para capturarlo, lo exhiben a nivel nacional y luego lo envían a una celda donde no se vuelve a saber nada de él.

Mientras tanto, la inseguridad continúa golpeando a la población sin misericordia ni tregua, el sistema de salud se desmorona, la inversión nacional y extranjera se aleja y miles de hondureños son desplazados a diario. En este panorama, los tres Poderes del Estado, dirigidos por el tripartidismo, están ocupados en proteger su pasado y desarrollar sus agendas políticas partidarias, con la mirada puesta en las elecciones de 2029, mientras muchos ya están en abierta campaña política, violando la ley electoral.

Los hondureños eligieron en 2025 una nueva composición del Congreso Nacional, con más del 70 % de diputados nuevos. Sin embargo, bajo la cobija y las directrices del tripartidismo, a nueve meses de gestión,

muchos se convirtieron en más de lo mismo: con sus salarios y privilegios al día, mientras la ciudadanía lucha para conseguir un tiempo de comida al día.

El presidente Nasry Asfura viaja principalmente a Europa y al Medio Oriente, con la misma promesa de siempre: “atraer inversiones millonarias”. Se anuncian “reuniones”, “acercamientos empresariales” y “oportunidades extraordinarias”, pero, a nueve meses de su gestión, lo único que han recibido los hondureños son fotos y panfletos en las redes sociales, mientras tanto en territorio hondureño, crisis total.

Wagner Vallecillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y sus 15 magistrados socios han resaltado por sobreseer u otorgar el derecho a defenderse en libertad a todos los peones, socios, narcos, lavadores de activos, pandilleros, mareros, militantes, simpatizantes, activistas y políticos del tripartidismo. Para el resto de la población, solo queda ser parte de una mora judicial que supera el 90 %.

¡Qué panorama más sombrío y espeluznante, pero real!

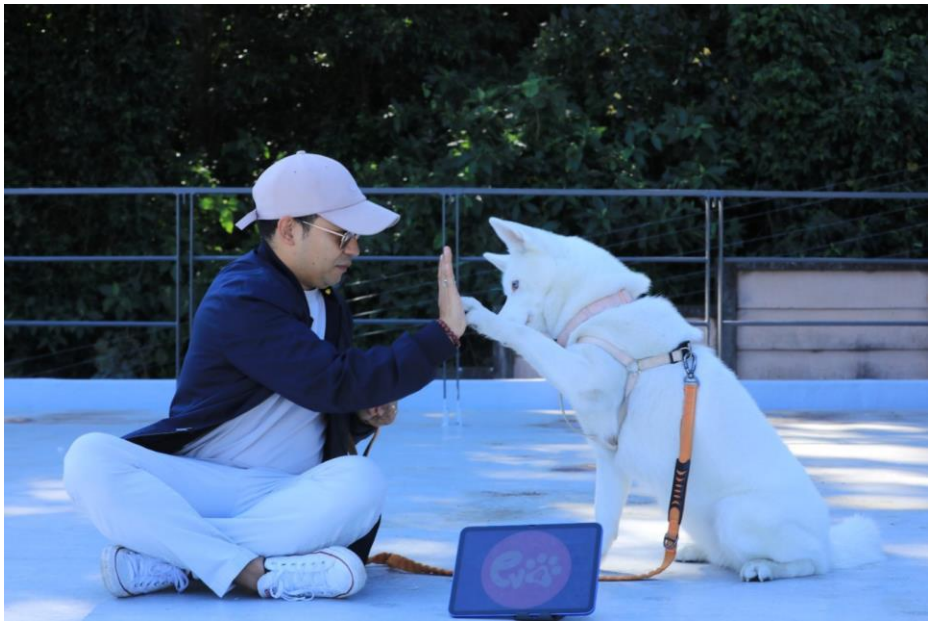
Este escenario se repite cada cuatro años en Honduras. Para los gobernantes de los tres Poderes del Estado, evidentemente, proteger su pasado es más importante. El Congreso debió comenzar aprobando leyes que desmiembren las estructuras de corrupción; el presidente Asfura tuvo la oportunidad de empoderar a Honduras en su mercado por excelencia y aliado estratégico: Estados Unidos.

El presidente de la Corte, Wagner, debió hacer justicia contra los corruptos, porque, mientras eso no se resuelva, Honduras difícilmente recibirá inversiones, tanto extranjeras como nacionales, que generen recursos en los bolsillos de los ciudadanos, mejoren su calidad de vida y reduzcan la inseguridad. El Gobierno debe pasar a ser únicamente un árbitro, quitándoles a los políticos partidarios la injerencia en la vida de los ciudadanos.

Un país no se gobierna con anuncios, viajes ni promesas que se repiten de una administración a otra. Se gobierna resolviendo problemas de raíz, enfrentando la corrupción sin proteger aliados y colocando al ciudadano por encima de los intereses partidarios.

Honduras está a la deriva, los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de no llegar a ningún puerto.

Una voz que no puede hablar: nuestras mascotas



En ocasiones, pensamos que aquellos que no hablan o se quedan callados no tienen voz, que no sienten o que no son capaces de expresar lo que les pasa porque son diferentes a nosotros. Muchas veces olvidamos que también existen seres que dependen de nosotros y que necesitan cuidado, protección y cariño.

En este caso, hablamos de nuestras mascotas. Para algunos, son un integrante más de la familia, incluso como un hijo; para otros, posiblemente solo representan una molestia o una responsabilidad que no desean asumir.

Pero hay algo que no debemos olvidar: ellos también sienten, sufren y crean vínculos con quienes los rodean. Su lealtad muchas veces se demuestra sin necesidad de palabras, acompañándonos en diferentes momentos de nuestra vida. A veces, basta con llegar a casa y ver cómo se acercan para recibirnos, cómo buscan nuestra compañía o cómo permanecen a nuestro lado cuando no estamos pasando por un buen momento. Son pequeños detalles que nos recuerdan que también existe una forma de cariño que no necesita palabras.

Sin embargo, no todas las mascotas tienen la misma suerte. Mientras algunas crecen en hogares donde reciben atención y afecto, otras sufren abandono, golpes, hambre o permanecen atadas sin las condiciones necesarias para vivir dignamente. En ocasiones, incluso somos testigos de estas situaciones y preferimos ignorarlas, como si no fueran un problema que nos corresponde.

En El Salvador existe la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, que busca proteger a los animales y promover un trato digno hacia ellos. Esta ley contempla medidas frente al maltrato y establece responsabilidades para quienes tienen animales bajo su cuidado. Su existencia es importante, porque nos recuerda que el bienestar animal no debe depender únicamente de la voluntad de cada persona, sino que también existe una responsabilidad que debemos cumplir.

Lo que establece la ley, debemos reflexionar sobre cómo estamos tratando a estos seres que, en muchas ocasiones, lo único que buscan es un hogar, alimento y un poco de cariño. No se trata de que todas las personas tengan mascotas, sino de comprender que, si decidimos tener una, debemos asumir el compromiso que esto representa.

Porque una mascota no debería ser vista como un objeto del que podemos deshacernos cuando deja de ser conveniente. Es una vida que depende, en gran medida, de nuestras decisiones y de la responsabilidad que asumimos al llevarla a nuestro hogar. Antes de adoptar o comprar un animal, también debemos pensar si contamos con el tiempo, los recursos y la disposición para cuidarlo durante toda su vida.

Desde nuestra convivencia diaria podemos empezar a cambiar esta realidad, enseñando a los más pequeños a respetar a los animales, evitando normalizar el maltrato y comprendiendo que tener menos capacidad para defenderse no significa tener menos valor. También podemos actuar cuando conocemos una situación de abandono o crueldad, buscando los canales adecuados para denunciarla.

Al final, ellos no pueden defenderse con palabras ni explicar lo que sienten, pero eso no significa que su sufrimiento no importe. Quizás nunca comprendamos por completo la manera en que perciben el mundo, pero sí podemos hacer el esfuerzo de tratarlos con respeto y responsabilidad.

Porque una sociedad también demuestra sus valores en la manera en que trata a quienes no tienen voz para exigir sus derechos.

Miembros del Círculo de Reflexión Política de El Salvador Siglo XXI

Juan Contreras • Oscar Martínez Peñate • Nelson Flores • Mélida Villatoro • Aldo Álvarez • René Martínez • Mauricio Rodríguez • Rafael Góchez • Jose Valdéz • Christian Colón